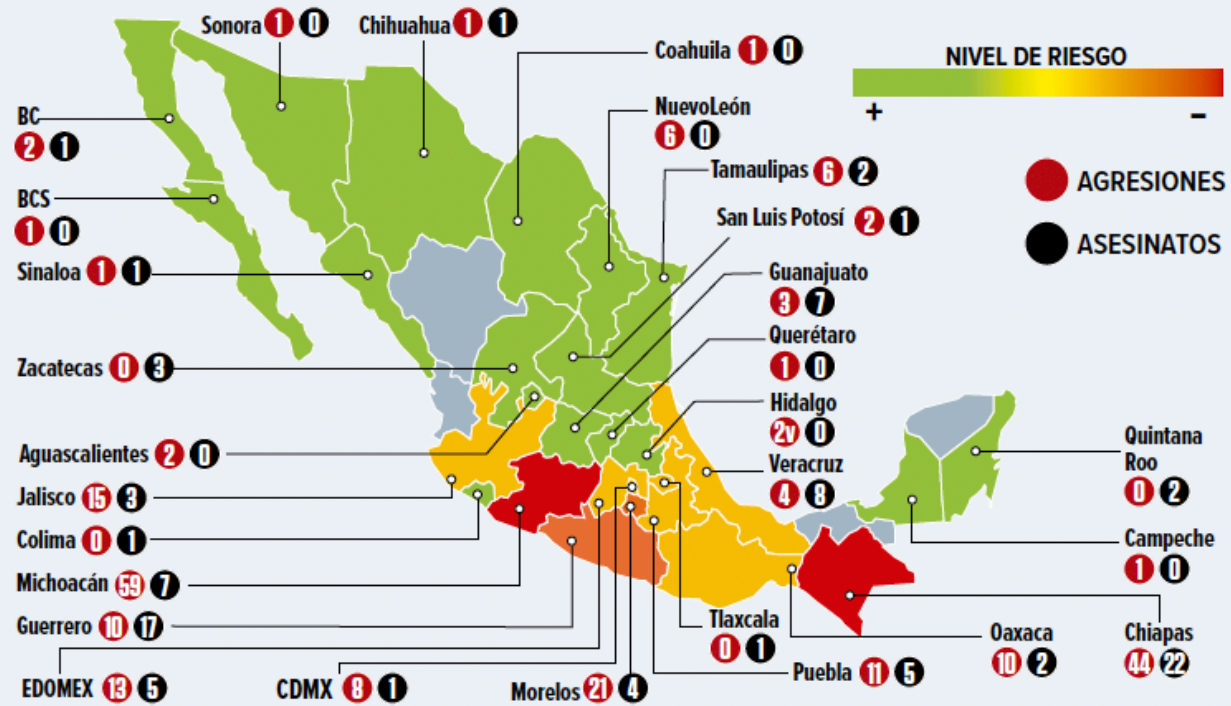


MAPA DE VIOLENCIA ELECTORAL

El proceso electoral 2023-2024 fue para las y los candidatos un constante acecho del crimen. Este fue el total de agresiones y asesinatos reportados:



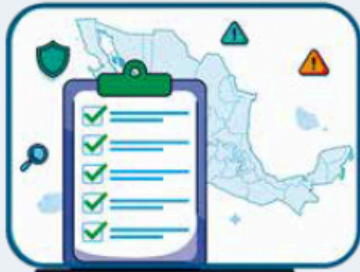
VIOLENCIA POLÍTICA

**ANTE ABANDONO, LANZAN
MANUAL DE AUTOCUIDADO
PARA CANDIDATOS**

Un nuevo protocolo impulsado por Laboratorio Electoral y la diplomacia británica propone mapas de riesgo y manuales de autocuidado para frenar un fenómeno que ya alcanzó las históricas elecciones judiciales que se realizaron por primera vez en el país

PROTOCOLO PARA AUTORIDADES

Las organizaciones detallaron lo necesario para mejorar la experiencia de candidatas y candidatos durante las elecciones:



PREVENCIÓN

(ANTES DE LA ELECCIÓN)
Elaborar un Mapa Nacional de Riesgos con datos de homicidios, agresiones, presencia criminal y financiamiento ilícito.



REACCIÓN

(DURANTE EL PROCESO)
Crear un modelo de "entrada universal": cualquier denuncia debe poder presentarse ante INE, OPL, fiscalía o policía.



REPARACIÓN

(DESPUÉS DE LA AGRESIÓN)
Garantizar la restitución de candidaturas forzadas a renunciar, ofrecer compensación económica y realizar reformas legales para evitar la repetición.

MANUAL DE AUTOCUIDADO

ANTICIPAR (ANTES DE SALIR A CAMPAÑA)

Semáforo territorial



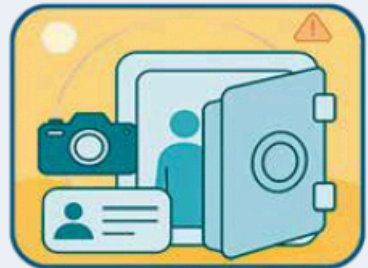
Zona roja:	No entrar sin protección robusta.
Zona amarilla:	Ingresar sólo de día y con equipo.
Zona verde:	No bajar la guardia.

Implementar un semáforo territorial (rojo, amarillo, verde) y mantener un control estricto de la agenda, evitando publicar ubicaciones en tiempo real.



PROTEGER

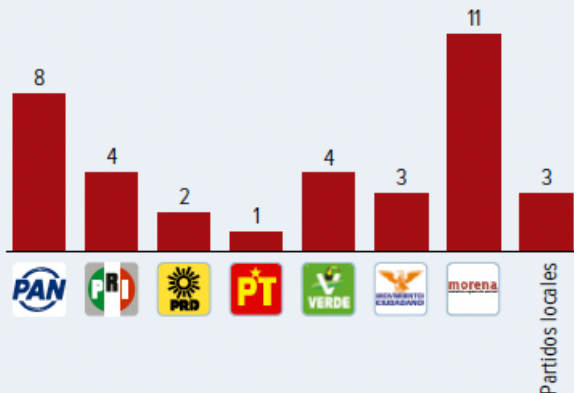
(RUTINAS Y ENTORNO)
Variar rutas de traslado, crear redes de alerta temprana con el equipo y activar medidas de seguridad digital como verificación en dos pasos y VPN.



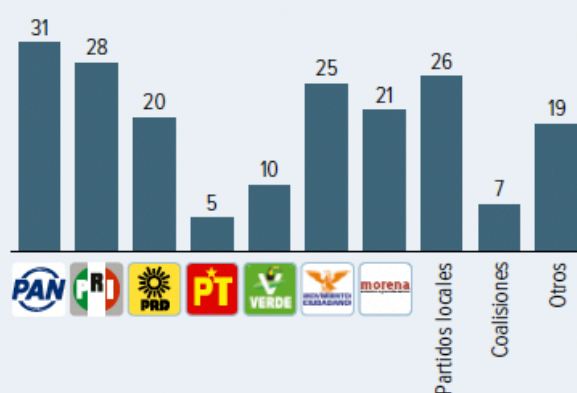
ACTUAR

(ANTE INCIDENTES)
No manipular paquetes sospechosos, dirigidas a lugares seguros ante seguimientos y documentar cualquier intento de extorsión sin confrontar.

CANDIDATURAS ASESINADAS EN 2023-2024



CANDIDATURAS AGREDIDAS EN 2023-2024



Fuente / Mapa e ilustraciones: Jesús Sánchez

POR AURORA ZEPEDA ROJAS
azepeda@gtmm.com.mx

En las elecciones de 2024, el costo de aspirar a un cargo público en México no solo se midió en voto, sino en vidas: 95 personas fueron asesinadas y se registraron 379 eventos de violencia, consolidándose como el proceso más violento en la historia reciente del país.

A pesar de la gravedad de las amenazas, los secuestros y los atentados, los partidos políticos han optado por el abandono de sus candidatos, dejándolos vulnerables frente a una respuesta institucional precaria.

Ante este vacío, Laboratorio Electoral y la Embajada Británica lanzó un protocolo de apoyo y un manual de autocuidado que buscan establecer condiciones mínimas de seguridad para sostener la democracia en regiones donde la participación ciudadana ha caído hasta un 7% debido al asedio criminal.

Este esfuerzo surge como una respuesta urgente a un patrón regional de violencia que se ha recrudecido en frecuencia y gravedad, afectando incluso las inéditas elecciones judiciales de 2025, donde se documentaron 18 casos de agresiones contra aspirantes, 32 incidentes contra funcionarios judiciales, empleados o familiares, así como nueve casos de violencia de género digital e institucional, principalmente contra mujeres.

Recuperando experiencias de México, Colombia y otros países latinoamericanos, el documento propone pasos a seguir por parte de las autoridades, no solo electorales, como la creación de mapas de riesgo y un semáforo de regiones peligrosas, que las candidaturas deberían conocer para planear sus estrategias de campaña, entre otras cosas.



Estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo al crimen organizado, pero gran parte de la violencia se vincula también a disputas político-partidistas.”

ARTURO ESPINOSA
DIRECTOR DE LABORATORIO ELECTORAL

Durante décadas, distintos países han vivido episodios de violencia que han marcado profundamente su vida política.

En los últimos años, el fenómeno se ha recrudecido en frecuencia y gravedad.

La Organización de los Estados Americanos ha documentado en sus misiones de observación apartados completos sobre violencia electoral.

Casos como el de Fernando Villavicencio en Ecuador o agresiones contra actores políticos en Bolivia, Colombia y Brasil muestran que se trata de un patrón regional, no de hechos aislados.

En México, la violencia de 2024 se concentró en el ámbito municipal, con picos en la definición de candidaturas, en la recta final de campañas y en los días posteriores a la jornada electoral.

En los 17 municipios más violentos, la participación cayó en promedio 7%. Chiapas, Michoacán, Guerrero y Morelos encabezaron la lista.

“Estamos acostumbrados a echarle la culpa de todo al crimen organizado, pero gran parte de la violencia se vincula también a disputas político-partidistas”, advirtió Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, al presentar el estudio.

También alertó sobre un vacío legal: antes del registro formal, las personas designadas por los partidos no son aún candidatas en términos jurídicos y, por tanto, carecen de protección

institucional, lo que las coloca en un periodo crítico de vulnerabilidad.

“La violencia judicial representa un riesgo democrático que aún no es posible dimensionar”, sostuvo, al advertir que puede generar autocensura, renuncias o incluso captura institucional.

Ante este escenario, y frente al bajo interés preventivo de los partidos, Laboratorio Electoral, con apoyo de la Embajada Británica en México, elaboró un Protocolo de atención y un Manual de autocuidado para candidaturas.

En el plano institucional, el documento propone medidas previas a la elección.

Entre ellas, la elaboración obligatoria de mapas territoriales de riesgo que integren variables delictivas, conflictividad política local y antecedentes de agresiones; la creación de un “semáforo” público que clasifique regiones por niveles de peligro; y la instalación de mesas permanentes de coordinación entre autoridades electorales, fiscalías y cuerpos de seguridad para activar respuestas inmediatas.

También plantea definir rutas claras de denuncia, tiempos máximos de reacción y criterios homogéneos para otorgar protección, evitando discrecionalidad.

Para las elecciones judiciales, el protocolo recomienda diseñar esquemas específicos, dado que las candidaturas no cuentan con estructuras partidistas ni experiencia en exposición pública.



A nivel latinoamericano

Las propuestas para gobiernos y candidatos se basan en experiencias durante las últimas elecciones en México, Colombia y Latinoamérica.

Se propone monitoreo exclusivo de violencia judicial-electoral, análisis de riesgo territorial enfocado en juzgados y tribunales, y tratamiento diferenciado de la violencia no letal (amenazas, coacción, presión simbólica) como indicadores tempranos de posible captura institucional.

El manual de autocuidado, dirigido a candidatas y candidatos, se enfoca en la gestión individual y de equipo.

Incluye lineamientos para evaluar riesgos antes de eventos públicos; protocolos básicos de seguridad en traslados y reuniones; control de agendas y difusión de ubicaciones; verificación de espacios; y coordinación previa con autoridades locales.

En el ámbito digital, recomienda blindar información personal, administrar redes sociales con filtros y respaldo documental, y establecer canales seguros de comunicación interna.

Un apartado central está dedicado a la protección de familiares y equipos cercanos, considerados un eslabón vulnerable para presiones y amenazas.

Se sugieren medidas de discreción en rutinas, protocolos ante intentos de intimidación y documentación sistemática de cualquier incidente.

El manual insiste en normalizar amenazas y en activar de inmediato las rutas institucionales disponibles.

La advertencia final es contundente: más de la mitad de los casos podrían no denunciarse nunca.

Sin monitoreo sistemático, reacción temprana y políticas preventivas, la violencia no sólo cobra vidas; altera la competencia, reduce la participación y erosiona la legitimidad democrática.

En ese contexto, mapear deja de ser una medida extraordinaria y se convierte en una condición mínima para sostener la democracia.